
Crónica del mes

Septiembre de 1981

Durante el mes de septiembre el foco de atención está desplazado hacia el ámbito internacional, como consecuencia de la Declaración Franco-Mexicana que vino a desatar una dinámica de toma de posturas múltiples ante una posible solución pacífica al conflicto salvadoreño. Tanto los gobiernos como los distintos sectores —sobre todo en El Salvador— tratan de pescar en río revuelto y de lograr alianzas para llevar el agua a su molino.

Con gran rapidez se emite la “Declaración de Caracas”, que acusa a la Declaración Franco-Mexicana de intervencionista y de sentar un precedente funesto, y es firmada por los cancilleres de nueve países latinoamericanos: los de regímenes militares del sur y de Centro América —que juzgarán, sin duda, que un precedente de ese tipo podría revertir fácilmente contra sus gobiernos— y los de Venezuela, Colombia y República Dominicana, condicionados política y económicamente por Estados Unidos. En cambio, Ecuador, Costa Rica y Perú adoptaron posturas más independientes, y en ningún momento se adhirieron a la Declaración de Caracas o a la acusación contra Francia y México, como quiso hacer ver la propaganda del régimen salvadoreño; Brasil mantuvo su tesis de neutralidad y de no-intervención en ninguno de los dos bandos, y Panamá adoptaría una postura propia de mediación, como la formularía días más tarde el Presidente Royo en la ONU. Aunque a primera vista pudiera dar la impresión de que la mayoría de los países de América estaban contra la negociación, sin embargo un análisis más preciso no ofrece los mismos resultados: si a esos cinco

países de política más independiente se suman los que se han pronunciado por la Declaración Franco-Mexicana —México, Nicaragua, Cuba— y los otros del área del Caribe y de las antiguas Guayanas que simpatizan con la postura o que luchan por una cuota mayor de autonomía política, así como la ambigua posición uruguaya, el resultado puede ser un equilibrio balanceado, que desaconseje llevar el problema al seno de la OEA. Pero incluso en la misma Declaración de Caracas las cosas no están tan claras como se las quiere presentar: al elogiarla el vocero del Departamento de Estado USA, Dean A. Fischer, la cancillería colombiana se ve obligada a declarar que ello no implica que se apoya la política norteamericana en El Salvador.

Mientras el gobierno USA se aferra a su postura militarista y de elecciones, como lo ratifican el Embajador Hinton a los Kiwanis y el Subsecretario Enders en el Centro de Relaciones Internacionales de Washington, al ofrecer ayuda económica y militar al régimen salvadoreño. Las voces discordantes resuenan cada vez con más fuerza en los Estados Unidos: el Senador Kennedy reconoce lo positivo de la Declaración Franco-Mexicana y pide al gobierno Reagan que propicie las negociaciones, y el “New York Times” editorializa que se les permita a esos dos gobiernos el intentar la solución política.

La adhesión de Nicaragua a la Declaración Franco-Mexicana vino a exasperar las ya tensas relaciones del gobierno salvadoreño con ese país, y darle oportunidad para incriminarlo en una nota oficial de la cancillería que lo acusa de intervención nicaragüense en

el conflicto salvadoreño; esto dio pie a la Alianza Productiva para condenar a Nicaragua, pero también para atacar de blando al gobierno salvadoreño y exigirle acciones más energías que simples notas de protesta.

En Europa los gobiernos o se adherían a la Declaración Franco-Mexicana —varios de los controlados por la social-democracia— o hacían declaraciones “diplomáticas” abogando por una solución política y por la no intervención, mientras los partidos socialistas y de izquierda de esos mismos países se pronunciaban por la Declaración y exigían a sus gobiernos que hicieran otro tanto. La Internacional Socialista, por boca de su Presidente, Willy Brandt, respaldó la Declaración Franco-Mexicana, e implícitamente hizo lo mismo el Parlamento Europeo al condenar la guerra y exhortar a buscar una solución pacífica que conduzca a la democratización del país; algo similar propuso el Canciller sueco, Ola Ullsten, ante la 36a. Asamblea General de la ONU. La 68a. Conferencia de la Unión Interparlamentaria Mundial aprobó por abrumadora mayoría una condena a la violación de los derechos humanos en El Salvador y propuso una solución similar a la franco-mexicana. En fin, 100 ministros de Relaciones Exteriores de “países no alineados” firmaron un comunicado en apoyo a la solución política en El Salvador que tome en cuenta a “todas las fuerzas políticas del país”.

Las reacciones internacionales, y principalmente las acusaciones formuladas en la Declaración de Caracas, obligaron al Presidente mexicano, López Portillo, a ratificar su posición, rechazando categóricamente que sea un acto de intervención, y afirmando que la realidad es la existencia de esas fuerzas políticas, por lo que ha hecho un llamado a la conciencia universal para encontrar una solución política, ya que la solución militar no hace sino continuar y profundizar la violencia e invitar a la intervención de otros; en fin, que México no ha ayudado ni económica ni militarmente a ningún bando, ni ha apoyado a ningún partido —clara alusión implícita a USA y Venezuela—.

En el ámbito nacional se trata de capitalizar la Declaración y sus consecuencias para sacarle partido a favor de los encontrados intereses: por un lado el gobierno aprovecha

la coyuntura para suscitar sentimientos nacionalistas y ganar apoyos internos y externos para la salida eleccionaria, y por otro los grupos cuya voz todavía se deja oír la utilizan para atacar al “sector político” del gobierno y obtener ventajas políticas a su favor.

Además de las primeras reacciones de los más altos niveles civiles y militares de la administración y de la empresa privada, también se pronunciaron contra la Declaración 12 ex-cancilleres y los partidos Acción Democrática y PCN, quienes culpan a la DC por incompetente y deslegitimada internacionalmente, hasta el punto de que la Secretaría de Información de la Presidencia tiene que hacer un llamado a la “unidad nacional” contra el enemigo común: el comunismo. También el presidente y el secretario de la Conferencia Episcopal Salvadoreña emitieron un comunicado, a nombre de la Conferencia, con términos muy semejantes a los oficiales, pero no parece ser ese el pensamiento de los demás obispos, y especialmente de Mons. Rivera, quien en la homilía dominical hizo un análisis más completo de la Declaración y de sus consecuencias, desde el Évangelio, para rechazarla si significara una intervención, pero para aceptarla si era una búsqueda de solución pacífica, a la que no hay que cerrarse en bien del pueblo, y pidiendo mayor apertura y flexibilidad ante las posibles soluciones para detener la violencia y el sufrimiento popular. Sólo el FDR-FMLN no emitió un comunicado oficial, si bien algunas agrupaciones y personeros hicieron pronunciamientos y declaraciones, que de ningún modo son suficientes para la relevancia que contiene la Declaración Franco-Mexicana.

El PDC y el gobierno iniciarán una ofensiva diplomática para recuperar poder y afianzar su posición política y la salida electoral. Previamente se definirá claramente la postura política oficial y se intentará aglutinar fuerzas internas para respaldarla, para lo que se utilizarán los actos públicos del 15 de septiembre. En ese día, aniversario de la Independencia, se reunirá una gran multitud en el Estadio Nacional para presenciar una “fiesta cívica militar y no política”, como diría el Ministro de Defensa, en la que tomó la palabra el Ing. Duarte para exponer la tesis oficial: repudio a la Declaración Franco-Mexicana, elecciones libres en los primeros me-

ses de 1982, invitación a todos los partidos, incluido el FDR si depone las armas, y un llamado a los observadores internacionales para que sean testigos de las elecciones. El gobierno y el PDC capitalizaron los actos como de unidad nacional y apoyo a su política; el coronel García como un acto de fe y confianza del pueblo en la Fuerza Armada; la empresa privada como de apoyo a las FF. AA. y a la solución militar y de vacío a las manifestaciones convocadas por el PDC. Lo que evidencia las profundas divisiones internas y el permanente halago de la empresa privada a la Fuerza Armada para que respalde su proyecto político.

Tras esta definición, la cancillería envía misiones especiales a Sur América, Europa y organismos internacionales para exponer la postura oficial, y el Ing. Duarte emprende una serie de giras, unas relámpago, a Costa Rica, Panamá y Guatemala, y una larga a los Estados Unidos. La visita a USA tenía una relevancia especial, no sólo por su duración (10 días), ni tampoco por su extensa comitiva en la que se incluyó una alta representación militar, sino sobre todo por los objetivos que se perseguían y por los contactos al más alto nivel que se tenían preparados. Si Haig declaraba que la visita perseguía un incremento de la ayuda económica y militar, Duarte diría que no iba a eso sino a pedir buena voluntad del pueblo norteamericano, exponer la realidad y pedir oraciones; en realidad, los contactos de alto nivel con el Presidente, el Secretario de Estado, el Senado, la OEA y la ONU, así como otras menores o más privadas, además de las entrevistas con los medios de comunicación, con un grupo simpatizante en San Francisco o con los familiares de las religiosas asesinadas a finales del año pasado, perseguían todos esos objetivos, y algunos más. La ayuda económica y militar —días antes USA había enviado a El Salvador 30 generadores eléctricos y, con esa excusa, más asesores, éstos en “electricidad”— sin duda estaba en el centro de las negociaciones, y prueba de ello es que se hizo coincidir la visita con la decisión que tomaría el Senado respecto a la enmienda propuesta por la Comisión de Relaciones Internacionales en cuanto a poner condiciones para la ayuda; de hecho Duarte se reunió con el Senado, para tratar de influenciarlo, y el

mismo Reagan convocó a la Casa Blanca a los principales senadores, con el mismo fin, pero la decisión mayoritaria de mantener las condiciones fue no sólo el primer revés político de Reagan de parte del Senado, sino que también un repudio a Duarte y su política. Frente a la opinión pública no saldría mejor parado, ni en el programa “Face the nation”, ni en San Francisco donde una manifestación contraria atrajo la atención e incluso en el mismo banquete dos comensales le increparon y fueron retirados de la sala contra su voluntad, ni en las múltiples entrevistas con los medios de comunicación a juzgar por los reportes y editoriales de los diarios más prestigiosos. A los familiares de las religiosas no supo darles respuestas satisfactorias, lo que convirtió la reunión en un impasse tenso y desagradable. El discurso en la OEA tuvo una respuesta enérgica del representante mexicano, Sr. De la Colina, y el de la ONU vendría seguido por la oferta de mediación de parte del Presidente Royo de Panamá, que fue largamente aplaudido. Un viaje, en suma, en el que la opción política salvadoreña-USA saldría más debilitada que fortalecida.

En todo este equilibrio inestable los grupos opositores que pueden expresarse aprovechan la coyuntura para atacar vehementemente al PDC, primero con ocasión de la Declaración Franco-Mexicana, como ya se indicara, y luego frente al proceso electoral tal como está planteado. En un comienzo serán la UPD, la UCS y la AD las que manifiestan que no hay condiciones para que se realicen las elecciones, luego se unirán el PCN, POP, PPS y ARENA —curiosa coincidencia de membresía con el partido militarista de Brasil— en sus ataques a unas elecciones garantizadas y propuestas por el actual gobierno y por un CCE en el cual el PDC tiene hegemonía, a lo que se añade el que no existan garantías mínimas para una campaña política. Como consecuencia, la convocatoria a elecciones, prevista para octubre, ha sido pospuesta para el mes de enero. Si a esos seis partidos políticos se agrega la reclamación de reinscribir al PAR, y si el PUCA se presentara a la contienda, habría ocho partidos de derecha, que pretenden representar al país y a sus habitantes dentro de una gama ideológica sumamente estrecha y que de no pactar alianzas se repartirán los escasos votos

reales si se verifican las elecciones.

La realidad económica del país, por otro lado, en contradicción con los éxitos y bonanzas proclamados por los más altos funcionarios del Estado y por el propio Duarte en su gira por USA, no puede ser más deprimente. De acuerdo a un documento del Banco Central de Reserva, presentado a AID y ROCAP, en julio necesitaría 345 millones de colones, y 249 en agosto, para seguir funcionando con la precariedad actual; según la empresa privada, en 1980 cerraron 171 empresas que dejaron sin trabajo a 30,000 personas, y en la actualidad no menos de 100 mil personas calificadas han abandonado el país por la problemática económica; el Ministerio de Economía ha reconocido que el precio de las medicinas ha aumentado en un 200 o/o; el propio Duarte reconoce la crisis debida a la fuga de 1,200 millones de colones, a la depresión cafetalera y al problema de la violencia; el nivel de endeudamiento externo no conoce parangón histórico, y aun las ayudas no son suficientes para detener la crisis interna, la disminución de reservas internacionales y la carencia de divisas; el PTB disminuyó un 10 o/o en 1980 y se prevé que en 1981 disminuya un 15 o/o; los sindicatos denuncian el cierre previsible de la Refinería de Azúcar y el despido de 600 trabajadores; ANDES reclama aumentos del 25 o/o, ya que el costo de la vida aumentó un 75 o/o en 1980; y el ISSS anuncia el congelamiento de plazas vacantes por el descenso de cotizaciones, debido a los cierres de puestos de trabajo, lo que arroja déficit de ingresos sobre egresos.

Al mismo tiempo que la batalla principal estaba centrada en el ámbito internacional, la guerra armada en El Salvador seguía su curso. Los presos políticos abandonaron la huelga de hambre a pesar de no haber logrado sus objetivos. Pero el FMLN intensificó desde mediados del mes sus acciones, no sólo de derribo de torres eléctricas (ya van más de 140), y de otra serie de sabotajes y bombas en la capital, sino también en el accionar militar, especialmente en Usulután (San Agustín) y en Cabañas; de hecho se reportaron 312 acciones diversas en el mes por todos los departamentos del país. Además de 22 ajusticiamientos, habrían causado 43 bajas a la FF.AA. (1 coronel, 1 mayor, 2 sargen-

tos, 1 subsargento y 35 soldados) de acuerdo a las "notas luctuosas", de la misma o 144 muertos, 64 heridos y 39 "bajas" más, según otras informaciones con cierto grado de credibilidad.

La contrainsurgencia también se intensificó en el mes, tanto a nivel de propaganda (Haig y otros voceros USA denunciaron la participación de mercenarios cubanos y de otros países en la lucha de insurrección, denuncia de la que se hicieron eco los altos mandos militares salvadoreños), como a nivel de acciones armadas. En la capital se realizaron por lo menos 10 operativos, y en el interior destacaron por su número de efectivos e intensidad los de Usulután y Cabañas, mientras en Morazán incursionaban nuevamente 35 soldados hondureños para atacar posiciones del FMLN, según denuncia de esa organización. También el Escuadrón de la Muerte anduvo muy activo y sus numerosas víctimas decapitadas o torturadas aparecieron por muchos sitios del territorio nacional, sobre todo en San Salvador y proximidades de Santa Tecla. Para renovar y fortalecer a la FF.AA., se han realizado en el mes nuevos actos de juramentación o de graduación en distintos cuerpos armados, con un total de 1,354, más un contingente no determinado que se juramentó en la 3a. Brigada de Infantería en San Miguel.

Como consecuencia de la violencia, los diarios han reportado 486 muertos de la población civil en el mes de septiembre, aunque otros indicadores parecen reflejar cifras mucho más altas, sobre todo si se toman en cuenta los caídos en los operativos y que no son militantes (incluidas algunas masacres colectivas denunciadas); de la cifra publicada 105 son campesinos y 305 "desconocidos". Por otro lado, el número de capturados se elevó en el mes a 314, sin contar los 600 sindicalistas de SICAFE que iban de excursión con la debida autorización y fueron detenidos por un retén algunas horas y luego puestos en libertad, a excepción de 18 de ellos que quedaron detenidos sin que hasta finales del mes se los hubiera liberado.

Desde la óptica salvadoreña, tan centrada en su propio problema, algunos acontecimientos vecinos pasaron casi desapercibidos, a pesar de su relevancia. El primero de ellos fue el nacimiento de Belice como nación in-

dependiente el 21 de este mes, y la posterior admisión en los organismos internacionales. Guatemala denunció la unilateralidad inglesa en conceder la independencia y rompió relaciones comerciales con la isla, además de otra serie de amenazas y de incrementar la militarización en la frontera, aunque afirmó que no invadiría; por otro lado, la guerra intestina se sigue recrudeciendo, y la amenaza de un grupo ultraderechista de liquidar al presidente mexicano obligó a cancelar una entrevista con el presidente guatemalteco.

En Honduras las cosas no se ven tampoco nada claras: en vísperas de elecciones se habla de posibles golpes de Estado, la Conferencia Episcopal exhorta a que los partidos presenten planes basados en la realidad y no en la demagogia. Los estudiantes se toman pacíficamente la sede de la ONU en Tegucigalpa y los trabajadores de la refinera Texaco se van a una huelga indefinida por el despido de 6 compañeros lo que reduce el abastecimiento de gasolina en un 40 o/o; el Presidente Paz García va a Caracas a pedir ayuda y ratifica allí su apoyo a la Junta salvadoreña a la vez que condena el "intervencionismo franco-mexicano", para viajar luego a México y, tras recibir un trato preferencial, firma un comunicado conjunto en el sentido de que El Salvador debe encontrar por sí mismo una vía pacífica; por último, se

están ultimando los preparativos de unas maniobras conjuntas Honduras-USA ante la protesta de Nicaragua y el Banco Central de Honduras tiene que racionar la venta de divisas para controlar su fuga que ya alcanza los 400 millones de dólares.

Nicaragua, acosada cada vez más por sus enemigos internos y externos, tiene que dedicar tiempo y energías a defender su revolución y consolidar su fuerza armada, ya sea por las maniobras conjuntas en su vecindad, ya por los grupos exsomocistas que se entrenan en los países del norte y en USA —según declaraciones de un exmilitar apresado por tráfico de drogas— y que hacen incursiones provocadoras, ya por el recién creado grupo "15 de septiembre" con su radio clandestina y su legión armada; ya por los directivos de la empresa privada que no dejan de hostigar al gobierno, y más ante el decreto de "Ley de Emergencia Económica y Social" que nacionaliza las propiedades cuyos dueños estén ausentes por más de 6 meses.

En fin, un mes en que nuevamente los destinos de El Salvador se discuten y ventilan fuera de sus fronteras, pero no se logra la única intervención digna: la de imponer la racionalidad que termine con la violencia y el exterminio del pueblo y abra el camino a la paz.

Crónica del mes

Octubre de 1981

Si hubiera que destacar alguna característica unificadora del proceso salvadoreño durante el mes de octubre, sería que en ese mes se evidencia que la guerra es total, en el campo ideológico y en el campo militar. En el ideológico se radicaliza aún más el enfrentamiento en el ámbito internacional entre la solución negociada y la solución militar-electoral, mientras que en el ámbito interno por un lado, se agudiza el conflicto entre los partidos no oficiales y el PDC y, por otro lado, se recrudece el ataque frontal a la iglesia católica. En el campo militar se intensifican las acciones de ambos bandos a nuevos niveles.

El Presidente de Panamá, Aristides Royo, ofreció en la ONU su territorio y sus buenos oficios para encontrar una vía negociada al conflicto salvadoreño, ofrecimiento que aceptó el FDR-FMLN, pero que rechazó el gobierno salvadoreño, que diplomáticamente agradeció el gesto pero se mantuvo en su postura de que las elecciones son el único camino y que no negociará con la oposición armada (postura que apoyó taxativamente la FF. AA. y la empresa privada). Pocos días más tarde Daniel Ortega, Coordinador de la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, en el seno mismo de la ONU presentaría una propuesta concreta con los cinco

puntos básicos para la negociación, y en su delegación estaba presente el Dr. Ungo, que fue aplaudido por la Asamblea. La reacción salvadoreña fue muy distinta a la que tuvo frente a Panamá, y el propio Duarte rechazó enérgicamente la propuesta y acusó violentamente a Nicaragua de cinismo, osadía e intervención; los altos mandos de la FF.AA. añadieron una velada amenaza de agresión armada a Nicaragua por parte de los ejércitos de los tres países del norte; el canciller cursó las correspondientes notas de protesta, en un ambiente proclive a ruptura de relaciones (que no llegarían a darse); y la empresa privada aplaudió las medidas y posturas adoptadas por el gobierno y la FF.AA.

Si el viaje de Duarte a USA no fue precisamente exitoso, parece que tampoco lo fue el de los ministros de trabajo y educación a América del Sur, en el que se quejaron de la desinformación que existe respecto a El Salvador en el Cono Sur, y en Ecuador se retiraron de un debate televisivo con el representante del FDR-FMLN porque se exhibieron películas sobre los principales hechos represivos del gobierno. Por su parte, el coronel Majano rompió el silencio sostenido desde su captura y expatriación, para denunciar al gobierno y la maniobra electoral. En las homilias dominicales de la catedral de San Salvador los jerarcas expresaron sus dudas respecto a las elecciones y propusieron diálogo y condiciones previas. Los presidentes de Estados Unidos y Venezuela, antes de la reunión de Cancún, ratificaron su postura de apoyo al gobierno salvadoreño y al proceso electoral, si bien Venezuela comienza a resentir en su interior un conflicto político interpartidario por su postura internacional en el conflicto; en cambio el presidente francés, también en vísperas de la misma reunión, volvió a ratificar su postura compartida con México de que la solución debe ser negociada a la vez que acusaba a USA por su corteidad de visión política y por su intervencionismo. El senador americano, Sr. Dodd, suscitó una tormenta en un vaso de agua con sus declaraciones de que dirigentes de la DC y del FDR le habían mostrado disposición al diálogo, pues la empresa privada aprovechó para culpar a la DC y ensañarse con ella una vez más, sin que fueran suficientes los desmentidos y aclaraciones del partido de go-

bierno. Casi al mismo tiempo el senador Burns, presidente del Subcomité de Asuntos Interamericanos, solicitaba la negociación, rechazaba las elecciones como salida y acusaba a su gobierno de pretender una victoria militar que él juzga imposible. En fin, el presidente del Congreso Nacional Africano suscribía un comunicado de apoyo total al FDR.

Sin embargo, el conflicto salvadoreño se ha llevado a un plano distinto, en un contexto regional más amplio, el del área del Caribe, por la vinculación que USA atribuye a Cuba y Nicaragua con los insurgentes salvadoreños. La campaña acusatoria a los dos países se ha incrementado hasta el punto de hablar de posibles agresiones armadas y crear un ambiente de guerra, a la vez que se coordinan medidas en todo sentido. Después del fracaso del "Mini-Marshall" (o grupo de Nassau), la reunión de Cancún, que no parece haber tenido mayores logros, sirvió para abordar de algún modo el problema, marginar a Cuba y otros países de la reunión; un grupo de 36 congresistas norteamericanos, por ejemplo, enviaron un documento de preguntas acusatorias contra la política exterior mexicana, y el Vicepresidente Bush realiza una gira por República Dominicana, Brasil y Colombia para lograr apoyos a la política USA en el área y montar una campaña contra Cuba y Nicaragua, para lo que se le ofrece una plataforma inigualable, como la reunión anual de la SIP en Brasil.

A la agresión verbal contra Cuba se añade el que Jamaica rompa relaciones con su vecina, "por orden de USA" según denunció el gobierno cubano. Respecto a Nicaragua la acción es más concertada: a nivel propagandístico se monta una gigantesca campaña contra el gobierno, para lo que da pie el que se detuviera y juzgara a 4 miembros de la empresa privada, lo que despertó las protestas y solidaridades de las correspondientes asociaciones del istmo, con una actitud farisaica, dado que callaron en absoluto el hecho de que simultáneamente, por los mismos motivos, habían sido detenidos y juzgados 24 miembros del partido comunista, entre ellos el secretario general y dos miembros del Consejo de Estado; a eso hay que añadir el silencioso pero efectivo bloqueo económico; y en el nivel militar, además de los continuos roces armados en la frontera, provocados por

grupos exsomocistas, se realizó la operación hondureña-USA "Halcón Vista" ante las protestas nicaragüenses. Pero las amenazas militares no se redujeron a palabras, ya que se está reestructurando el CONDECA, o unión de los ejércitos de los países centroamericanos del norte, para formar lo que se ha dado en llamar "Triángulo del Norte" (Guatemala, El Salvador y Honduras), para lo que se han mantenido reuniones del más alto nivel, e incluso visitó San Salvador el presidente de Guatemala, Lucas García, para hacer declaraciones favorables a la revitalización del CONDECA, como hiciera también el coronel norteamericano Dickens y algunos altos mandos salvadoreños, si bien Honduras se pronunció en contra del "Triángulo del Norte" y optó por no romper relaciones con Nicaragua —al igual que sus dos vecinos—; en fin, el ministro de defensa salvadoreño, coronel García, en una entrevista concedida al radioperiódico costarricense "Noticias Monumental", admitió que de los 30,000 muertos en guerra 1,300 son de la F.A., más de 4,000 guerrilleros y los 24,700 restantes son personas que nada tenían que ver con el conflicto; previno a Costa Rica de la amenaza comunista que le puede llegar; sostuvo la debilidad de los insurgentes, pero añadió que para vencerlos hay que cortar la ayuda externa que les llega, para lo que se requiere de la "Organización del Triángulo Militar del Norte, que es una arma defensiva contra el comunismo". Como epílogo de todas esas maniobras, un avión costarricense fue secuestrado por un grupo de exsomocistas y exigió la liberación de varios detenidos por el ataque a "Radio Noticias del Continente"; obtenido su objetivo todo el grupo fue a parar a un aeropuerto privado salvadoreño, creándole al gobierno un nuevo y grave problema internacional por la demanda de devolución del grupo de parte de Costa Rica, la firma de convenios contra la piratería aérea y la presión de grupos internos que demandan la no-extradición.

Mientras tanto, en el ámbito nacional se continúa con la lucha planteada entre los partidos políticos inscritos y el sector político del gobierno. Según el secretario general del PDC, Rey Prendes, los sectores de extrema derecha que trataron de evitar las elecciones ahora se han constituido en partidos,

por lo que "tenemos una gama de partidos políticos que va de la extrema derecha a un centro moderado de derecha"; fórmula feliz para describir el espectro político salvadoreño anuente a participar en las elecciones, en el que la DC —acusada por los demás de "comunitarismo-comunismo"— obviamente ocupa el "centro moderado de derecha" a cuya diestra se ubica todo el resto, mientras que el centro propiamente dicho y toda la izquierda no se ven representados, a pesar de las insistentes invitaciones al MNR, UDN y al mismo FDR de parte del CCE y del propio Duarte. Por otro lado, para "ayudar" en todo el proceso electoral, también en el Consejo Central de Elecciones (CCE) hay asesores norteamericanos, según declaró el embajador Hinton.

La aparente diversidad de minipartidos inscritos o por inscribir se traduce de hecho en una similitud ideológica y estratégica que bien puede conducir a la conformación de un partido único (de derechas), como ya lo ha propuesto algún dirigente. En lo ideológico coinciden en un liberalismo a ultranza, en detener o dar marcha atrás a las reformas, en oponerse a la mediación y a la participación electoral del FDR. En lo estratégico, en halagar a la F.A., en atacar violentamente al PDC por su incapacidad de resolver los problemas del país y por haber copado los puestos políticos y el CCE así como por su proyecto "comunitarista", y en exigir cambios en el CCE y en el mismo gobierno como garantía para las elecciones. Así se expresarán los oradores de la "Convención de la Unidad Productiva", el mayor D'Abuisson por ARENA, el General Medrano por el POP, los oradores de la "Cena de Solidaridad Nacional" organizada por la Unidad Productiva (que, según el presidente de ASI y ANEP, no era un evento político), el PCN en sus periódicas "Esquinas"; mientras el PDC unas veces trata de defenderse de las acusaciones que le hacen, y otras contraataca con agrias invectivas a sus detractores. Por su parte el CCE trata de dar buena imagen de honestidad: entrega a los partidos políticos el anteproyecto de Ley Electoral, los convoca a un Foro de discusión, invita nuevamente a todos a participar, incluso los del FDR si se prestan al juego electoral, ofrece garantías de limpieza bajo observadores extranjeros, pide la abolición

del Toque de Queda y Estado de Sitio, reconoce que de los documentos escrutados hay por lo menos un 3 o/o de personas que poseen entre dos y seis cédulas distintas y que no hay datos exactos de personas fallecidas; en fin, que ellos no renuncian si no les quitan quienes les pusieron.

El otro frente de lucha interna es el ataque frontal contra la iglesia católica, que continúa siempre bajo diversas formas, ya sea en campañas de desprestigio de la institución, sus personas y sus obras, ya sea en artículos y campos pagados, en organizaciones fantasma como CESPDES, en hojas volantes, o en atentados dinamiteros, como el realizado contra el colegio La Divina Providencia por haber allí religiosas mexicanas y después de la Declaración Franco-Méxicana, o en inculpaciones de supuestos subversivos capturados, como en el caso del P. Crespín "invitado" a declarar por esa razón en la Policía de Hacienda.

Pero el cúlmen de la campaña se alcanza con el caso Pellecer, un jesuita guatemalteco secuestrado violentamente y retenido en los Cuerpos de Seguridad de Guatemala durante 113 días, al que la F.A. de ese país presenta a los medios diplomáticos e informativos el 30 de septiembre, como un converso que se ha entregado en los brazos de la institución armada para redimirse y emprender un nuevo camino, a la vez que ataca a numerosas personas y obras y, lo que es más grave, a la misma Iglesia en su doctrina oficial y en su pastoral. Un costoso show bien montado pero subdesarrollado —como las telenovelas criollas— en el que el "programado" P. Pellecer manifiesta una aceleración compulsiva por discursar y mezcla datos reales con infinidad de inexactitudes y falsedades e incurre en graves contradicciones. La F.A. salvadoreña patrocinó dos veces su presentación por la cadena nacional de radio y televisión, pero días más tarde lo trajo en persona para presentarlo a los medios diplomáticos y de comunicación en la Escuela Militar de El Salvador, con retransmisión por radio nacional y por los canales educativos, y una posterior reunión en el mismo local con los obispos y el provincial de los jesuitas —que se habían negado a asistir a la reunión pública— ante la presencia de varios militares y siendo grabada magnetofónicamente la reu-

nión. Algo debió salir contra los objetivos trazados, pues la presentación en El Salvador casi pasó desapercibida, probablemente por el hecho de que Pellecer sostuvo la necesidad de las reformas estructurales como vía de solución a los problemas salvadoreños, cosa que fue atacada por la poderosa derecha como de postura jesuítica y de la UCA, e incluso que Pellecer podía ser un jesuita infiltrado en los cuerpos de seguridad, como llegó a decir el obispo castrense en privado. A las presentaciones públicas de Pellecer siguió una gran campaña de acusaciones y desprestigio de la Iglesia y especialmente de los jesuitas y se repartieron profusamente por la capital y por los centros religiosos hojas volantes inculminatorias a la Compañía de Jesús e insultantes, pidiendo su expulsión del país, y firmadas por una tal LAS (Liga Anticomunista Salvadoreña).

Tanto los jesuitas en diversos campos pagados, como el provincial en su comunicado de prensa, la Directiva de la Federación de Colegios Católicos y el Administrador apostólico de San Salvador con el Senado, denunciaron la campaña contra la Iglesia, la violación de los derechos fundamentales del P. Pellecer, denegaron la credibilidad de sus declaraciones en las circunstancias expresadas, defendieron la doctrina de la Iglesia y sus líneas pastorales, desautorizaron a las FF.AA. para juzgar de la ortodoxia y de la pastoral eclesiales, y exigieron la libertad de Pellecer para esclarecer la verdad de los hechos, así como el respeto a su persona.

En el campo de las acciones militares éstas se han incrementado notablemente en el mes de octubre. De parte de las fuerzas insurgentes las acciones se han multiplicado, tanto en lo que a sabotajes se refiere como en otras estrictamente militares ya sea de contención a los operativos montados contra ellas ya sea en acciones ofensivas en la misma retaguardia a los operativos y en otros lugares. Pero resalta de modo especial la destrucción del llamado "Puente de Oro", el más grande y caro que sobrecruza el Lempa, en la carretera del Litoral tras un ataque a las guarniciones aledañas, y que deja cortado la mayor parte del tráfico hacia el oriente de la república —días más tarde destruirían también otro puente (el de Ishuatán o "Las Guaras") en la carretera de San Martín a Suchi-

toto, con lo que dejan aislada esta población. La destrucción del "Puente de Oro" fue llevada a cabo en la madrugada del propio día 15 de octubre, fecha en la que se celebró el 20. aniversario del golpe, declarado día de asueto general, con una serie de actos en el Estadio Nacional en los que tomó la palabra el único sobreviviente en la Junta de aquel movimiento, el coronel Abdul Gutiérrez, Comandante General de las FF.AA. En su discurso —ante una multitud menor que la congregada allí mismo el 15 de septiembre— elogió el movimiento y sus resultados "superiores a los planteados en la Proclama", afirmó las dificultades en esos dos años, como nunca antes las hubo, anunció la destrucción del puente en esa madrugada, comunicó la supresión del Toque de Queda —el Estado de Sitio—, renovado por 21 vez consecutiva a finales del mes, se diría que no afectaría a los partidos políticos— y prometió una nueva amnistía cuyos términos aún no se definían. El PDC también quiso capitalizar el aniversario a su favor, pero otros grupos políticos se lo denegaron e incluso llegaron a afirmar (PCN) que la conmemoración sólo debía celebrarla la FF.AA. y los integrantes del primer gobierno.

La destrucción del "Puente de Oro" (aparte de los irrelevantes artículos publicados en torno a su verdadera membresía y origen) fue un detonante para una crisis de alguna gravedad. Los insurgentes no hicieron ningún comunicado oficial que explicara el significado bélico del hecho, y tanto el gobierno como la empresa privada y demás partidos se lanzaron a una gran invectiva contra los "terroristas desesperados" (tesis también apoyada por voceros USA). Pero la discusión también versó sobre si era estratégico o no, —aparte de las repercusiones económicas— y por qué no se había defendido militarmente de manera eficaz. Aunque las bajas militares se reportaron como mínimas, es difícil aceptar que después de tantas horas de enfrentamiento, y dadas las guarniciones que había en el puente y en los pueblos aledaños no sean más elevadas. En general en el mes de octubre —y hasta la fecha de la redacción de esta crónica— no hay datos globales de las bajas reportadas por la FF.AA., y si los insurgentes les adjudican varios cientos en los distintos enfrentamientos, sabotajes y

operativos, la FF.AA. reconoció en los periódicos 20 muertos con nombres y apellidos en el operativo de Usulután y San Vicente.

También las acciones de contrainsurgencia se intensificaron en el mes de octubre. Concluyó un gran operativo en Chalatenango en el que la FF.AA. dijo haber matado a 110 insurgentes y haber tenido 25 bajas de su parte. Después de la destrucción del "Puente de Oro" se montaron amplios operativos en las márgenes del Lempa, en Usulután y San Vicente y en el departamento de Cabañas. El FMLN denunció con esa ocasión dos masacres colectivas, una en Usulután de 74 campesinos (muchos de ellos niños impúberes) y otra de 15 en San Vicente; por su parte el vocero del Departamento de Estado, Dean Fischer, reconoció la denuncia de que un piloto de helicóptero salvadoreño que sobrevolaba la zona del puente destruido, con tres asesores militares y un ingeniero, todos norteamericanos, a bordo, ametralló a un grupo de personas porque, dijo, "creía que pertenecían a la guerrilla".

Como consecuencia de la represión, y a pesar de que a inicios del mes los periódicos misteriosamente no reportaban muertos, los datos publicados dan por lo menos 633 asesinados en la población civil, muchos de ellos degollados y torturados, a manos del Escuadrón de la Muerte o de similares características, y los periodistas publicaron el caso de José Rolando Castellanos, quien fuera sacado de su casa durante el Toque de Queda por la policía uniformada y luego fusilado junto a otros dos, aunque a él lo dieron por muerto pero quedó con vida. Como capturados se han reportado por lo menos 72 personas, entre ellas un periodista peruano de "Uno más Uno", tres profesores y un sacerdote. ACNUR informó que en el exterior se han registrado 329,500 refugiados salvadoreños, pero que estima que ascienden a 500,000; que sumados a los internos ("desplazados") se aproximan al millón, o al 20 o/o de la población total.

La economía, en fin, se sigue deteriorando, a juzgar por las quejas de caficultores y comerciantes; el Subsecretario de Economía reconocía en San José que el país no puede pagar las deudas que tiene en la región; el Presidente del Banco Central dijo que el gobierno opera con déficit desde hace

dos años y que por la desconfianza exterior se han suspendido los créditos blandos; el Ministro de Hacienda anunció que el presupuesto de 1982 será un 5 o/o inferior al de este año (eso sin descontar la inflación previsible de un 54 o/o), y el Subsecretario de Ingresos afirmó que hay una disminución del 40 o/o en los ingresos fiscales; el Subsecretario de Planificación reconoció veladamente que los gastos de la guerra afectan la economía nacional; y del Ministerio de Educación se quejaron de que los planes de regionalización están a punto de fracasar por la situación financiera, ya que los fondos destinados no llegan, y a muchos maestros no se les paga desde marzo.

Mientras tanto, en el contexto centroamericano los problemas no se resuelven tampoco. Costa Rica ve agravarse aún más su economía, el colón se vende en el mercado negro a razón de 60 por un dólar y se piensa devaluarlo a una paridad de 20. En Honduras parece haberse detectado corrupción en la Refinería Texaco y en el Ministro de Hacienda; sin embargo, la situación política ha pasado a un segundo plano ante la inminencia de los juegos de fútbol (Hexagonal) para la clasificación al mundial.

Donde la situación se ha agravado notablemente ha sido en Guatemala. La instrumentalización del caso Pellecer es sintomática de la captación de la crisis por el gobierno que le lleva a la utilización de los medios a su disposición, por inmorales que sean. La vio-

lencia va acrecentándose día a día y los grupos insurgentes muestran un poder cada vez mayor. El Ministro de Salud Pública sigue secuestrado, así como tres periodistas. Se convoca a las próximas elecciones y los candidatos propuestos hasta la fecha son de ultraderecha. Pero la guerrilla entre tanto ha realizado más atentados dinamiteros en la capital y a finales de mes ha realizado el golpe más audaz hasta el presente: la toma de tres cabeceras departamentales (Sololá, Mazatenango y Escuintla) con destrucción de edificios públicos y decenas de muertos, entre ellos dos coroneles (el gobernador y el jefe de policía de Sololá), y acciones menores en otras dos cabeceras departamentales noroccidentales. La reacción del gobierno a estos hechos, además de la intensificación de la represión y de los operativos militares en las zonas agredidas, ha sido repetir la misma cantinela salvadoreña-USA: inculpar a México, Cuba y Nicaragua de proteger y enviar subversivos y pertrechos de guerra.

Un mes, por consiguiente, en que la situación se torna aún más confusa y que las decisiones se barajan en el exterior, al quererle dar al conflicto salvadoreño (y centroamericano-caribeño) una dimensión internacional y no querer ver las causas donde están ni querer encontrar soluciones porque lesionarían intereses inconfesables.

Eugenio C. Anaya.